

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE LA
CIUDADANÍA**

EXPEDIENTE: JDC-023/2025

PARTE ACTORA: OSCAR
ANTONIO ASIAIN HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

MAGISTRADA PONENTE:
SOCORRO ROXANA GARCÍA
MORENO

SECRETARIADO: MARÍA DEL
CARMEN RAMÍREZ DÍAZ Y
HÉCTOR VILLALOBOS GAYTÁN

**Chihuahua, Chihuahua; a dieciocho de febrero de dos mil
veinticinco.¹**

Sentencia definitiva por la cual **se ordena** al Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua le informe a la parte actora los motivos por los cuales lo excluyó del Listado de personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales del Proceso de la Elección Extraordinaria 2024-2025

GLOSARIO

Parte actora:	Oscar Antonio Asiain Hernández
Comité de Evaluación:	Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
Congreso Local:	Congreso del Estado de Chihuahua
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local:	Constitución Política del Estado de Chihuahua

¹ Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veinticinco, salvo mención en contrario.

Convocatoria:	Convocatoria participar en la evaluación y selección de postulaciones de la Elección Extraordinaria 2024-2025 de las personas que ocuparán los cargos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
JDC:	Juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía
Ley Electoral Reglamentaria:	Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para elegir personas juzgadoras del Estado de Chihuahua
Acto impugnado:	Listado de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad del Proceso de la Elección Extraordinaria 2024-2025, emitido por el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
PEE:	Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025
PJE:	Poder Judicial del Estado de Chihuahua

ANTECEDENTES

1. Inicio del PEE. El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro dio inicio el PEE para la elección de personas juzgadoras del PJE.

2. Emisión de la Convocatoria. El diez de enero, el Congreso Local emitió la Convocatoria, la cual estableció como plazo para que las personas interesadas se inscribieran del trece al veinticuatro de enero.

3. Publicación de listas de aspirantes. El doce de febrero, el Comité de Evaluación publicó el listado de aspirantes que cumplían con los requisitos constitucionales y legales para continuar a la siguiente etapa del PEE.

4. Presentación de escrito de impugnación. El catorce de febrero, la parte actora, en su calidad de aspirante a juez de primera instancia especializado en Justicia Penal para Adolescentes, en el Distrito Judicial Benito Juárez, presentó medio de impugnación ante el Comité de Evaluación en contra de la exclusión de la lista antes referida.

5. Formación, registro y turno. El diecisiete de febrero, el Magistrado Presidente emitió acuerdo por medio del cual se formó y registró el expediente identificado con la clave **JDC-023/2025**; el cual fue turnado a esta ponencia para su sustanciación y resolución.

6. Admisión, cierre de instrucción, circulación de proyecto. El diecisiete de febrero se admitió el medio de impugnación, se abrió y cerró el periodo de instrucción, por lo que se circuló el proyecto de resolución para que fuera convocado al Pleno de este Tribunal para su discusión y, en su caso, aprobación.

COMPETENCIA

Este Tribunal es **competente** para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un JDC interpuesto en contra del acuerdo a través del cual se aprobó el listado de las personas que cumplían con los requisitos constitucionales y legales para continuar a la siguiente etapa del PEE, para la renovación de las personas juzgadoras del PJE, emitido por el Comité de Evaluación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, segundo y tercer párrafo, 37, Transitorios Primero y Segundo de la Constitución Local; así como 20, 83, 84 la Ley Electoral Reglamentaria.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia², como se detalla a continuación:

1. Forma. Se cumple con tal requisito, toda vez que el medio de impugnación se interpuso por escrito, contiene el nombre y firma autógrafa de la parte actora, domicilio para oír y recibir notificaciones, se identificó el acto impugnado, los hechos en que se basa la

² De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley Electoral Reglamentaria.

impugnación; los agravios que le causa el acto controvertido y los preceptos jurídicos presuntamente violados.

2. Oportunidad. Se cumple este requisito ya que el acto impugnado fue publicado el doce de febrero y el JDC fue presentado el catorce siguiente, cumpliendo con el plazo para impugnar de cuatro días a partir de que surte efectos la notificación.

3. Legitimación e interés jurídico. Se tienen por acreditados estos requisitos dado que el escrito fue presentado por la parte actora, por su propio derecho, en su calidad de aspirante a juez de primera instancia especializado en Justicia Penal para Adolescentes, persona inscrita en la Convocatoria, razón por la cual está en aptitud de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable, al impactar en su esfera de derechos al haberle negado su registro como aspirante.

4. Definitividad. Se satisface dicho requisito porque de la normativa aplicable se desprende que no existe medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado por la actora, por lo que se trata de un acto definitivo.

CONTROVERSIA

1. Síntesis de agravios

La parte actora controvierte su exclusión del listado de aspirantes que cumplían con los requisitos de elegibilidad emitido por el Comité de Evaluación y, de manera toral expone haber presentado la totalidad de la documentación requerida en la Convocatoria, sin embargo, alude que no fue incluido en dicho listado sin motivo o fundamento sin notificación alguna respecto al por qué tomó tal decisión.

Además, advierte que, en todo caso, la autoridad responsable debió prevenirle para que subsanara cualquier omisión de algún requisito.

2. Planteamiento de la controversia

La **pretensión** de la parte actora es que se les informe las razones de su exclusión y, en su caso, se ordene su inscripción en el listado correspondiente.

La **causa de pedir** se sostiene en que la parte actora considera que cumplió con todos los requisitos de ley, por lo que debía aparecer en el multicitado listado.

La **controversia en el presente asunto consiste** en determinar si el Comité de Evaluación estaba obligado a informar las razones por las cuales fue excluido del listado de aspirantes, ya que, a juicio de la parte actora, cumplió con los requisitos de elegibilidad publicados.

ESTUDIO DE FONDO

1. Tesis de la decisión

Para este Tribunal, el agravio planteado resulta **fundado** en virtud de que el Comité de Evaluación debió informar a la parte actora qué requisitos de elegibilidad incumplió; ello, al no advertir comunicación alguna con la persona concursante.

2. Marco normativo

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal establecen la exigencia de que todo acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, a fin de brindar seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos.

Mediante dicha exigencia se persigue que toda autoridad exponga de manera clara y detallada las razones de hecho y de Derecho que está

tomando en consideración para apoyar sus determinaciones, a fin de evitar que se adopten decisiones arbitrarias.³

En este sentido, siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para satisfacer este requisito debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.⁴

La fundamentación y motivación como una garantía de las personas gobernadas está reconocida en los ordenamientos internacionales como es el artículo 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la motivación es una de las debidas garantías previstas en dicho precepto, con el que se pretende salvaguardar el derecho a un debido proceso.⁵

En ese sentido, la fundamentación y motivación como parte del debido proceso constituye un límite a la actividad estatal, como el conjunto de requisitos que deben cumplir las autoridades para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de autoridad que pueda afectarlos.⁶

Asimismo, es criterio de este Tribunal que el incumplimiento al deber de fundar y motivar se puede actualizar: i) por falta de fundamentación y

³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152, consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf.

⁴ Resulta orientadora la tesis relevante de la Segunda Sala de la SCJN, con registro 818545, de rubro **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN**.

⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 141, consultable en https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf.

⁶ Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72. Párr. 92.

motivación y, ii) derivado de la incorrecta o indebida fundamentación y motivación.

La falta de fundamentación y motivación consiste en la omisión en que incurre la autoridad o el órgano partidista responsable de citar los preceptos que considere aplicables, así como de expresar razonamientos lógico-jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación de esas normas jurídicas.

En cambio, la indebida fundamentación de un acto o resolución existe cuando la autoridad u órgano partidista responsable invoca algún precepto legal, el cual no es aplicable al caso concreto porque sus características particulares no actualizan su adecuación a la prescripción normativa.

Finalmente, hay indebida motivación cuando la autoridad u órgano partidista responsable sí expresa las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

En ese orden de ideas, es válido concluir que la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia de tales requisitos, mientras que, una indebida fundamentación y motivación supone la existencia de esos requisitos, pero con una divergencia entre las normas invocadas y los razonamientos formulados respecto del caso concreto.

Aunado a ello, los efectos en uno y otro caso son igualmente diversos, toda vez que, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación, en tanto que, en el segundo, la autoridad debe expresar correctamente, fundamentos y motivos diferentes a los que formuló en el acto o resolución impugnada.

3. Caso concreto

La parte actora señala que el Comité de Evaluación debió haberle informado o notificado la razón de su exclusión del listado, ya que a su dicho cumplió con todos los requisitos previstos en la Convocatoria.

Resulta **fundado** el agravio, toda vez que la autoridad responsable tuvo que haber informado el motivo por el cual la parte actora incumplió con los requisitos presentados al inscribirse en la Convocatoria.

Ello, pues al tratarse de un acto de autoridad mediante el cual se le impidió continuar en el procedimiento de evaluación, este acto debe estar fundado y motivado.

Al respecto, en la Convocatoria se estableció que el Comité de Evaluación de cada Poder del Estado debía verificar que las personas aspirantes reunieran los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, para posteriormente publicar el listado de las personas que hayan acreditado dichos requisitos y puedan continuar a la siguiente etapa.

En el caso concreto, concluido el plazo para la inscripción, el Comité de Evaluación integró y publicó el listado de las personas aspirantes que, a su consideración, reunían los requisitos de elegibilidad a través de la documentación que presentaron; lo que implicó, materialmente, que las personas que no aparecían en el listado incumplieron alguno de los requisitos y, por lo tanto, no podrían seguir participando.

Ahora bien, dentro del listado emitido por la autoridad responsable se advierte únicamente que se mencionaron a las personas aspirantes que cumplían con los requisitos constitucionales y legales, sin que dentro de el se ubicara a la parte actora, como tampoco se advierten las razones y fundamentos jurídicos para que no aparezca ahí.

Si bien no era necesario que se incluyera un estudio pormenorizado del por qué cada una de las personas aspirantes cumplieron o no con los requisitos necesarios para el cargo que pretendían alcanzar, ello no lo

eximía de informar a la parte actora la causa de su exclusión a fin de que éste tuviera pleno conocimiento de las razones que sustentaron esa decisión, en atención al principio de legalidad.

Ello, pues al tratarse de un acto de autoridad mediante el cual se impidió a las personas promoventes continuar en el procedimiento de evaluación, **este acto debía estar fundado y motivado**, lo cual implicaba necesariamente que se explicitara en cada caso qué requisito o requisitos incumplió la persona aspirante.

Así pues, lo **fundado** del agravio radica en que la responsable debió cumplir con un estándar mínimo de motivación, de tal forma que la parte actora, en su carácter de aspirante, tuviera un parámetro de referencia para comprender por qué no figura en el listado de participantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

Ello, porque es indispensable que se conozcan las razones específicas y causas inmediatas que sustentaron la decisión de la responsable, pues sólo así puede cuestionar el acto de autoridad y confrontar tales razones con los argumentos que considere adecuados para revertir dicha determinación.

Cabe precisar que la falta de fundamentación y motivación del Comité de Evaluación no significa que debió haber admitido a todas las personas aspirantes. Sin embargo, sí tuvo que haber notificado a cada participante que no apareció en la lista la razón por la cual no podía continuar en el proceso de evaluación respectivo.

EFFECTOS

Se ordena al Comité de Evaluación que, en un plazo máximo de **seis horas**, contadas a partir de la notificación del presente fallo emita una determinación en la que de manera fundada y motivada precise las razones y fundamentos jurídicos considerados para excluir a la parte actora dentro de la lista de personas aspirantes que cumplieron con los

requisitos de elegibilidad, misma que deberá notificarle personalmente de forma inmediata o mediante el correo electrónico que para tal efecto fue proporcionado por la parte actora.

En el entendido de que, de considerar que se encuentra acreditados los requisitos previstos en la Convocatoria, el Comité de Evaluación deberá generar una adenda para que la parte actora sea incluida en el listado de personas elegibles y continuar en el proceso.

De igual forma, se le ordena informar a este Tribunal del cumplimiento dado a esta determinación dentro de las **tres horas** a que ello ocurra.

Por lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

ÚNICO. Se **ordena** al Comité de Evaluación del Poder Judicial a cumplir con lo ordenado en el presente fallo.

NOTÍFIQUESE:

- **Personalmente** a Oscar Antonio Asiain Hernández.
- **Por oficio** al Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
- **Por estrados** a las demás personas interesadas.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante la Secretaria General Provisional, con quien se actúa y da fe. **DOY FE.**

•

- **HUGO MOLINA MARTÍNEZ**
- **MAGISTRADO PRESIDENTE**

**SOCORRO ROXANA
GARCÍA MORENO**

MAGISTRADA

**GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA
RAMÍREZ**

MAGISTRADO EN FUNCIONES

NOHEMÍ GÓMEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIA GENERAL PROVISIONAL

La suscrita con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente **JDC-023/2025** por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en Sesión Pública de Pleno, celebrada el dieciocho de Febrero dos mil veinticinco a las doce horas. **Doy Fe.**